

Galera de corrección

BENJAMÍN HOPENHAYN Y ALEJANDRO BARRIOS

Las malas herencias

Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2002, 140 páginas.

Este breve pero sustancioso trabajo –como lo son los de la excelente Colección Popular del Fondo de Cultura Económica- es una cuidadosa reconstrucción del proceso económico argentino desde 1976 hasta comienzos de 2002. Y no es casual que el punto de partida sea precisamente el del inicio de la última dictadura militar que, para sostener el modelo que iniciaba, apeló a la más sangrienta represión que conoció nuestro país.

Como muy bien dice el filósofo latinoamericano Martín Hopenhayn –hijo de uno de los autores de este libro- la Argentina duele porque lleva muchos años pasando de la enfermedad a la agonía. “Duele la irracionalidad con que el

país se fue al tacho. Duele la acción tan impasible de una mafia política y una mafia financiera. Duele la posta de la impunidad, desde la represión política y el terror de estado de la dictadura militar, hasta el robo sistemático que le siguió”.

Este libro bien podría haberse titulado “*Un manual para la destrucción de un país. Cómo aplicar las recetas que ya han fracasado*”.

La obra está estructurada desde el punto de vista de qué hizo cada gobierno con la herencia que le tocó en suerte, a partir del punto de inflexión que marca el golpe de estado de 1976.

La presencia de Alfredo Martínez de Hoz y los intereses que representa en los inicios de esta caída es esencial. En realidad el golpe militar fue efectuado, en forma más o menos simultánea con los de otros países latinoamericanos, para evitar la reacción popular ante la implementación de un modelo económico, apoyado so-

bre principios monetaristas, que instalaba un modo de acumulación basado sobre la renta financiera y no sobre la producción y el trabajo.

Indefectiblemente su aplicación significaba la destrucción sistemática de la incipiente industria local, con su correlato de desocupación, marginación e indigencia de amplios sectores de la sociedad argentina.

El peso sobrevaluado, una apertura cada vez mayor e indiscriminada del mercado, el desmantelamiento del Estado y un ajuste fiscal, por vía de la reducción del gasto público, fueron estableciendo los principios inamovibles del modelo, que derivaron en una paulatina reducción del PIB. Los autores recuerdan que en el año 1983 éste era igual al de 1975, sin tomar en cuenta el crecimiento vegetativo de la población.

Recuperada la democracia, el nuevo gobierno no sólo recibió las ruinas que le dejó el Proceso, sino que éstas estaban minadas. "Duele la barbarie disfrazada de racionalidad, la injusticia social oculta tras el lenguaje pretendidamente científico de los tecnócratas", continúa doliéndose Martín.

Los autores señalan los cuatro objetivos que debía perseguir el nuevo gobierno: 1) reactivar la producción con una alta generación de empleo; 2) elevar los salarios reales para mejorar la participación de los asalariados en el ingreso; 3) abatir drásticamente la

superinflación y 4) hacer frente a las restricciones y obligaciones que planteaba la enorme deuda externa contraída en los años de la dictadura, con altas tasas de interés y cortos plazos. El cumplimiento de cada uno de los objetivos, difícilmente era compatible con el logro de los demás.

Los militares -señalan los autores- entregaron ruinas, "la demanda interna reducida en un 16 %, el consumo en un 10% y el salario real un 35% respecto de 1975, el nivel de inversión en 1983 sólo alcanzaba al 14% del producto bruto, el nivel de liquidez media reducido a un asfixiante 11,6%, la desindustrialización llevó al cierre a más de 17.000 establecimientos industriales y redujo la participación del sector en un 25% en términos del producto por habitante en sólo 8 años. La deuda externa pasó de cerca de 7.500 millones de dólares a alrededor de 45.000 millones en 1983. Los intereses devengados anualmente por la deuda, a su vez, ¡se multiplicaron quince veces en el término de ocho años!".

Como vemos, definir como "ruinas minadas" el estado de la economía nacional a la entrega del poder por parte del gobierno militar es un acierto con sólo analizar la cita precedente, que no alcanza sino a reflejar de forma parcial la situación.

En el libro se describe con rigurosidad la dimensión real de la situación inflacionaria heredada del

gobierno militar: “En noviembre de 1983, el mes anterior a la restauración del gobierno de derecho, los precios minoristas aumentaron alrededor del 20%, con lo que la tasa de inflación anualizada al final de la dictadura ascendió al hiperinflacionario nivel del 830 %. En los 8 años anteriores (1975-1983) el nivel general de precios al consumidor había aumentado 30.000 veces y el de los precios mayoristas cerca de 37.000 veces”

En la descripción del período 1984/89, si bien reconocen la enorme debilidad de la situación económica y social recibidas como una verdadera “mala herencia”, B. Hopenhayn y A. Barrios señalan un período de fallidas estrategias para enfrentarlas.

La única salvedad la constituye la breve gestión del ministro de Economía Bernardo Grinspun, quien confrontó con los organismos financieros internacionales enfrentando fuertemente sus requerimientos, pero sin lograr evitar el crecimiento inflacionario y el correlativo aumento salarial, en un infructuoso esfuerzo para evitar la evidente pérdida de la participación del sector asalariado en la distribución del ingreso.

Es así que la Argentina es también protagonista de la década pérdida de los '80 en América latina, con caída del consumo y la inversión, estancamiento, tendencia recesiva e hiperinflación con baja

salarial y la adopción del dólar como reserva de valor y unidad de cuenta.

Las expectativas que había despertado el retorno a la vida democrática en el país no encontraron adecuado correlato con una realidad que presentaba falencias fundamentalmente en lo económico, pero que también era debilitada por algunas medidas de carácter político tales como el denominado “punto final” y la “obediencia debida”.

Los autores describen con acierto el escenario que llevó a la entrega prematura del poder al presidente electo y, sobre todo, la directa intervención del sector financiero local y extranjero junto con los organismos internacionales.

La obra señala que las autoridades que asumieron en diciembre de 1999 “recibieron una herencia económica y social muchísimo más gravosa que lo que percibieron (o transmitieron) ellos mismos, y mucho menos el imaginario social argentino”. Se refieren a la recesión de la economía nacional y la simultánea suspensión del financiamiento externo, lo que significaba la carencia de recursos para reactivar la economía, llevando a los niveles de desempleo, subempleo, pobreza e indigencia más altos de los últimos 50 años, eso sí, en una economía estabilizada en cuanto a los precios y enmarcada en un régimen de convertibilidad que, si bien resultó útil

como mecanismo para frenar la inflación, a la larga condujo a la recesión señalada.

Demás está señalar que el cuadro socioeconómico que dejaron las presidencias de Menem fue francamente desolador. La industria devastada, la propiedad concentrada y extranjerizada, la especulación financiera y el consumo suntuario privilegiados por sobre la producción y la atención a las necesidades básicas de la población fueron el marco para que en los '90 sólo el 10% más rico de la población aumentara sus ingresos reales contra el 90% restante que se empobreció.

“Duele la desintegración conviviendo con el caradurismo, la desesperación de la mayoría estrellándose en la autocomplacencia de una minoría” nos dice Martín H. aludiendo al período en el cual, al decir de los gobernantes, entrábamos al primer mundo de la mano de la globalización.

Fernando de la Rúa, llevado al gobierno por una alianza que se mostró endeble para implementar los objetivos sobre los que se sustentó, no modificó la herencia recibida, antes bien, profundizó las causas que impidieron impulsar la economía y mejorar las condiciones sociales. Sometido al modelo neoliberal heredado, no enfrentó a la coalición de poder consolidada en el decenio menemista.

Esta situación hizo eclosión en diciembre de 2001; la presión social produjo la renuncia del gobier-

no que fue reemplazado por el congreso nacional con sucesivos recambios presidenciales.

El libro finaliza con un muy breve análisis acerca de las medidas económicas adoptadas hasta mayo de 2002, señalando que no se ha logrado reducir la crisis. Las decisiones tomadas -devaluación, pesificación de deudas empresarias, ajuste del gasto público, cambio forzado de depósitos por bonos públicos y otros- no hicieron sino profundizar la depresión, que recién ahora parecería empezar a revertirse.

Los autores han hecho un importante aporte a la memoria. En pocos textos se ha podido contar con una secuencia temporal de un proyecto económico que llevó al país, de herencia en herencia, a su crisis más profunda.

Los autores son economistas y como tal efectúan su análisis desde esta perspectiva; sin embargo, en ningún momento dejan de lado su preocupación por los aspectos humanos que esta situación ha generado a los habitantes de la Argentina.

La indignación por la aplicación de este proyecto en el último cuarto de siglo recorre sus páginas. Una economía con rostro humano, dice Amartya Sen, y los autores adhieren explícitamente a este concepto.

Estamos a las puertas de un nuevo gobierno que una vez más recibe una pesada herencia. Al mismo tiempo, la sociedad argen-

tina está dando muestras de rechazo a estas políticas y señala, de algún modo, que no está dispuesta a tolerar pasivamente que se despilfarre el potencial nacional.

En palabras de los autores “la sociedad tiene por delante la tarea de lograr acuerdos básicos que permitan salir de la depre-

sión, encontrar un camino de desarrollo que aproveche las ventajas y minimice los riesgos de la globalización, priorizando la atención de los problemas sociales heredados para poder legitimar otra vez la democracia”.

Mayo de 2003

Mónica Padlog
Abraham L. Gak

